



## ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 31, n.º 112, 2026, e 0919199  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL  
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA  
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555  
Para citar utilice este ARK: <https://n2t.net/ark:43441/0919199>  
Deposited in Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18214807>



## Marshall y los caminos de la ciudadanía latinoamericana después de la globalización (2000–2025)

*Marshall and the paths of Latin American citizenship after globalization (2000–2025)*

Abril Lucila GÓMEZ FAJARDO

<https://orcid.org/0009-0007-5512-101X>

23500386@uagro.mx

Universidad Autónoma de Guerrero, México

## RESUMEN

Se examina la transformación de la ciudadanía latinoamericana entre 2000 y 2025, a través de un enfoque comparativo y longitudinal que integra datos cualitativos y cuantitativos. Retoma la propuesta clásica de T. H. Marshall sobre derechos civiles, políticos y sociales, y la articula con la perspectiva crítica de José Carlos Luque Brazán, quien entiende la ciudadanía como un camino híbrido entre el modelo nacional y el posnacional. El estudio analiza ocho países de la región (México, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela) y cinco dimensiones de derechos: civiles, políticos, sociales, culturales/plurinacionales y digitales. Se muestran avances en inclusión política, políticas sociales, reconocimiento cultural y expansión de derechos digitales, pero también retrocesos severos en derechos civiles debido a violencia estructural, crisis institucional y autoritarismos. La ciudadanía latinoamericana es un entramado híbrido, estratificado y no lineal, donde la soberanía estatal convive en tensión con prácticas transnacionales, procesos decoloniales y dinámicas digitales emergentes. Se concluye que la región aporta una reflexión propia para repensar la teoría de la ciudadanía desde el Sur Global, articulando justicia social, reconocimiento cultural y derechos digitales como pilares de una ciudadanía plural del siglo XXI.

**Palabras clave:** Ciudadanía Latinoamericana; derechos civiles, justicia, Estado.

## ABSTRACT

This article analyzes the transformation of Latin American citizenship between 2000 and 2025 through a comparative and longitudinal approach combining qualitative analysis and verifiable statistical indicators. It revisits T. H. Marshall's classical framework of civil, political, and social rights, and connects it with José Carlos Luque Brazán's notion of citizenship as a hybrid process between national and post-national logics. The study evaluates eight countries in the region (Mexico, Chile, Colombia, Argentina, Peru, Ecuador, Bolivia, and Venezuela) across five dimensions: civil, political, social, cultural/plurinational, and digital rights. Findings indicate significant progress in political inclusion, social policies, cultural recognition, and digital rights, alongside serious setbacks in civil rights due to structural violence, weak judicial systems, polarization, and emerging authoritarianism. Latin American citizenship thus appears as a hybrid, stratified, and non-linear system where state sovereignty coexists in tension with transnational practices, decolonial dynamics, and expanding digital spheres. The article argues that Latin America offers a unique vantage point to rethink citizenship theory from the Global South, integrating social justice, cultural recognition, and digital rights as key elements of a plural and twenty-first-century citizenship.

**Keywords:** Latin American citizenship; civil rights, justice, the State.

Recibido: 07-09-2025 • Aceptado: 02-11-2025



Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Más información en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



58381774

## INTRODUCCIÓN

El concepto de ciudadanía ha sido uno de los pilares de la teoría política moderna, una de esas nociones que, como señaló Marshall (1950), sintetizan el vínculo entre individuo, derechos y Estado en el marco de una comunidad política organizada. Sin embargo, en el tránsito del siglo XX al XXI, el paradigma marshalliano se vio desbordado por procesos globales que transformaron radicalmente la relación entre el sujeto, el territorio y el poder político. América Latina, en particular, ha vivido esta tensión de modo agudo: la promesa de una ciudadanía social inclusiva se enfrenta con la persistencia de desigualdades estructurales, la erosión del Estado social y la emergencia de nuevas formas de pertenencia transnacional.

Desde inicios del nuevo milenio, el modelo liberal de ciudadanía —centrado en la triada derechos civiles, políticos y sociales— ha mostrado fisuras profundas frente a la expansión del neoliberalismo, la financiarización de la vida y la globalización digital. Las reformas estructurales impulsadas desde los años ochenta, sumadas a la deslocalización productiva y la flexibilización laboral, no solo transformaron las economías latinoamericanas, sino también los fundamentos mismos del contrato social. La ciudadanía, más que un estatus garantizado, se convirtió en un campo de disputa simbólica y material, donde se entrecruzan las luchas por el reconocimiento, la redistribución y la representación.

En este sentido, el siglo XXI ha sido testigo de una doble paradoja: mientras los discursos democráticos se expanden y las constituciones latinoamericanas reconocen cada vez más derechos, las condiciones materiales para ejercerlos se restringen. La ampliación formal de la ciudadanía convive con la precarización laboral, la privatización de los bienes públicos, la desprotección ambiental y el debilitamiento de los sistemas de seguridad social. Esta brecha entre igualdad jurídica y desigualdad real produce lo que Luque Brazán (2017) denomina una “ciudadanía fracturada”, característica del capitalismo dependiente y del ciclo postneoliberal incompleto de la región.

No obstante, los últimos veinticinco años no pueden reducirse a un proceso de erosión. También han emergido nuevas formas de ciudadanía que desafían las fronteras tradicionales del Estado-nación y del mercado. Estas ciudadanías insurgentes —migrantes, indígenas, feministas, ecológicas o digitales— amplían la gramática de los derechos más allá de la institucionalidad clásica. En América Latina, movimientos sociales como el zapatismo en México, las asambleas piqueteras en Argentina, las mareas feministas, los pueblos originarios andinos o los colectivos migrantes en Chile y México, han reformulado las prácticas de participación y pertenencia. Desde estos márgenes se ha gestado una ciudadanía en movimiento, flexible, relacional y transnacional, que interpela tanto a los Estados como a los organismos internacionales.

La globalización, entendida no solo como fenómeno económico sino también cultural y tecnológico, ha trastocado los referentes clásicos de la pertenencia política. Si en el modelo marshalliano el ciudadano estaba inscrito en el marco territorial del Estado-nación, hoy asistimos a lo que Saskia Sassen (2006) llama una “desterritorialización parcial” de la ciudadanía. La movilidad humana, las redes digitales y los espacios supranacionales —como los regímenes de derechos humanos o las plataformas transnacionales— redefinen los límites del demos. En América Latina, esta transformación adopta matices propios: el migrante que vota desde el extranjero, la mujer que interpela al Estado desde el ciberespacio, la comunidad indígena que ejerce autonomía frente a la soberanía estatal, o el colectivo ambientalista que defiende territorios más allá de las fronteras nacionales. Estos procesos revelan una doble desglobalización. Por un lado, la crisis del proyecto neoliberal global ha expuesto la fragilidad de los circuitos económicos que sostenían la promesa de movilidad ascendente. Por otro, el resurgimiento de nacionalismos excluyentes y discursos de odio —particularmente después de 2016— ha generado nuevas formas de cierre identitario y restricción de derechos. América Latina, ubicada en la periferia del sistema mundial, se ve afectada simultáneamente por ambos movimientos: la desintegración de los mercados globales y el repliegue autoritario de los Estados. En este contexto, revisar la propuesta de T. H. Marshall no implica reproducir su esquema secuencial de derechos (civiles, políticos y sociales), sino repensarlo críticamente desde el Sur Global. En su momento, Marshall describió el desarrollo de la ciudadanía británica como un proceso de ampliación progresiva de derechos vinculada al surgimiento del Estado de bienestar. Sin embargo, en América Latina, dicho proceso fue fragmentario, desigual y

frecuentemente invertido: se reconocieron primero derechos sociales (educación, salud, trabajo), antes que los civiles y políticos, y muchos de ellos permanecen como promesas incumplidas. La región no transitó del liberalismo al welfare state, sino del colonialismo a una modernidad dependiente, atravesada por la violencia, el racismo y la informalidad.

Por ello, la lectura contemporánea de Marshall en clave latinoamericana requiere incorporar dimensiones históricas, estructurales y culturales que exceden la visión eurocéntrica de la ciudadanía. Autores como Aníbal Quijano (2000), Boaventura de Sousa Santos (2014) o Silvia Rivera Cusicanqui (2015) han mostrado que la ciudadanía moderna se edificó sobre la exclusión colonial de vastas mayorías. Así, la “ciudadanía universal” fue, en realidad, una ciudadanía segmentada, donde la raza, el género y la clase funcionaron como fronteras internas. Repensar la ciudadanía latinoamericana después de la globalización implica entonces descolonizar el concepto, reconocer la pluralidad de formas de pertenencia y los múltiples sujetos políticos que disputan el sentido de lo común. El período comprendido entre 2000 y 2025 permite observar tres dinámicas convergentes. En primer lugar, la crisis de legitimidad del modelo neoliberal y el agotamiento del paradigma tecnocrático del desarrollo, lo que dio paso a una oleada de gobiernos progresistas y postneoliberales (2003–2015) que buscaron articular democracia con justicia social. En segundo lugar, la emergencia de nuevos actores sociales que irrumpieron en el espacio público —mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, migrantes, disidencias sexuales— con demandas que desbordaron los canales tradicionales de representación. Y en tercer lugar, el impacto de la revolución digital, que reconfiguró los modos de participación política, información y control social. La pandemia de COVID-19 aceleró este último proceso, intensificando tanto la digitalización del espacio público como la desigualdad en el acceso a él.

El desafío contemporáneo radica en articular estos tres procesos en una nueva noción de ciudadanía: posneoliberal, interdependiente y digitalmente mediada, capaz de responder a las crisis del trabajo, la ecología y la representación política. Como advierte Nancy Fraser (2022), la era del “capitalismo caníbal” exige reinventar los marcos de redistribución y reconocimiento en clave de sostenibilidad social y ecológica. En América Latina, esto supone recuperar la dimensión colectiva de la ciudadanía, fortalecer los bienes comunes y democratizar las instituciones más allá del Estado.

El horizonte latinoamericano, entonces, no es el del ciudadano aislado y propietario, sino el del sujeto relacional y comunitario, que participa en redes de solidaridad y prácticas de autogobierno. De allí la relevancia de los debates actuales sobre ciudadanía plebeya, democracia desde abajo y epistemologías del Sur, que buscan rescatar la agencia de los pueblos frente a la captura neoliberal del lenguaje de los derechos. Este giro epistemológico implica concebir la ciudadanía no solo como conjunto de prerrogativas, sino como práctica situada de resistencia, memoria y creación política. La obra de Luque Brazán (2020, 2023) ha insistido en que la ciudadanía latinoamericana contemporánea se configura en una “migrapolis” transnacional, donde los sujetos migrantes producen una esfera pública alternativa. Esta tesis puede extenderse al conjunto del continente: la ciudadanía ya no es exclusivamente nacional ni estatal, sino transescalar y multiterritorial. Las redes digitales, las diásporas, los circuitos feministas y las luchas ambientales constituyen nuevas formas de comunidad política. En ellas se ensayan modelos de democracia radical que combinan igualdad, autonomía y diversidad.

Por tanto, abordar los caminos de la ciudadanía latinoamericana después de la globalización implica analizar no solo los límites del paradigma marshalliano, sino también las potencialidades de las nuevas configuraciones sociales. El período 2000–2025 ofrece un laboratorio privilegiado para observar cómo las crisis globales —económicas, sanitarias, climáticas y democráticas— han catalizado formas inéditas de participación y pertenencia. Si el siglo XX fue el de la institucionalización de los derechos, el XXI parece ser el de su reapropiación desde abajo. Esta investigación, en diálogo con autores como Quijano, Santos, Fraser, Luque y Calderón Chelius, busca reconstruir los itinerarios de esta ciudadanía plural, tensionada entre el colapso neoliberal y las insurgencias democráticas. En suma, se propone demostrar que la ciudadanía latinoamericana contemporánea no ha desaparecido con la globalización, sino que se ha reconfigurado: de una ciudadanía estatal y pasiva a una ciudadanía transnacional, relacional y colectiva, que resiste la mercantilización de la vida y afirma nuevas formas de comunidad en tiempos de incertidumbre.

La noción de ciudadanía se ha transformado profundamente durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Los procesos de globalización, digitalización, migración y crisis de legitimidad estatal han erosionado el paradigma clásico heredado de la modernidad liberal: aquel que, como formuló T. H. Marshall (1950), se estructuraba en tres pilares —los derechos civiles, políticos y sociales— y encontraba en el Estado nacional su ámbito de realización. América Latina ha vivido esta transformación con intensidad, pues combina tres condiciones simultáneas: democracias de baja densidad institucional, desigualdades históricas persistentes y pluralidades culturales que desafían la homogeneidad nacional. En este contexto, el presente ensayo propone examinar la evolución de la ciudadanía latinoamericana entre los años 2000 y 2025, articulando el marco clásico de Marshall con la perspectiva crítica de José Carlos Luque Brazán en *Los caminos de la ciudadanía: entre el modelo nacional y el postnacional* (FLACSO México, 2002). Este diálogo teórico permite construir una lectura renovada: la ciudadanía contemporánea en América Latina no transita de un modelo a otro, sino que habita una zona híbrida, donde lo nacional y lo postnacional coexisten, se tensan y se redefinen constantemente.

Desde los inicios del siglo XXI, la región experimentó tres ciclos sucesivos que configuraron distintos modos de ejercicio ciudadano

1. 2000–2014: expansión social, con el auge de los gobiernos progresistas y programas redistributivos (Bolsa Familia, Prospera, AUH, Bono Juancito Pinto).
2. 2015–2019: crisis de legitimidad, giro conservador y debilitamiento de políticas sociales.
3. 2019–2025: reconfiguración tras las protestas masivas, la pandemia y la irrupción de los derechos digitales.

Cada uno de esos ciclos supuso una redefinición del equilibrio entre derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

A lo largo de este cuarto de siglo, la ciudadanía latinoamericana ha enfrentado un dilema fundamental: ¿cómo sostener el horizonte universalista de derechos dentro de Estados nacionales fragmentados y economías globalizadas? En respuesta, emergen tres tendencias convergentes:

1. La ampliación formal de los derechos políticos, con la incorporación de leyes de paridad, mecanismos de participación y nuevos procesos constituyentes (Chile, Bolivia, Ecuador).
2. El deterioro de los derechos civiles, expresado en violencia estructural, criminalidad organizada y debilidad judicial.
3. La diversificación de los derechos sociales y culturales, donde la interculturalidad, la paridad de género y la digitalización redefinen las fronteras de la ciudadanía.

Desde esta perspectiva, el artículo adopta una propuesta de la metáfora de los *caminos*, “la ciudadanía no es una condición dada, sino un recorrido atravesado por múltiples mediaciones”. (Luque, 2002). En América Latina, esos caminos se bifurcan según la capacidad estatal, la densidad institucional, la estructura social y la incorporación —o exclusión— de actores subalternos: mujeres, pueblos indígenas, migrantes y juventudes.

El análisis comparado de ocho países —México, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela— busca captar la diversidad de esos itinerarios. Se examinan los cinco ejes de derechos: civiles, políticos, sociales, culturales/plurinacionales y digitales, en el período 2000–2025. El objetivo es doble:

- identificar patrones regionales de convergencia o divergencia;
- y analizar cómo los modelos nacional y postnacional se entrelazan en la práctica.

El trabajo se apoya en fuentes verificables y rastreables: informes de CEPAL, PNUD, Banco Mundial, Freedom House, V-Dem, CIDH, y estadísticas nacionales, complementadas con literatura académica contemporánea (Fraser, Kymlicka, Honneth, Taylor, Rivera Cusicanqui, Quijano, Jelin).

La hipótesis central sostiene que la ciudadanía latinoamericana ha experimentado una reconfiguración estructural: los derechos sociales y culturales se han expandido, pero los civiles y políticos se hallan bajo presión; y los derechos digitales emergen como nuevo campo de disputa postnacional. Esta reconfiguración produce una ciudadanía estratificada, donde el reconocimiento y la redistribución avanzan de modo desigual y donde la pertenencia nacional ya no garantiza la totalidad del ejercicio ciudadano.

Teóricamente, el artículo combina tres perspectivas:

1. La secuencia marshalliana (civil-política-social).
2. La crítica posnacional y transnacional (Habermas, Soysal, Luque).
3. La perspectiva decolonial latinoamericana (Quijano, Rivera Cusicanqui, Dussel), que cuestiona la matriz eurocéntrica de ciudadanía.

A diferencia de los debates europeos sobre posnacionalidad, en América Latina la cuestión no se plantea en términos de cesión de soberanía a la Unión Europea o a organismos supranacionales, sino como una búsqueda de reconocimiento y redistribución más allá de los límites de Estados desiguales. De ahí que los actores subalternos —migrantes, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes— constituyan el laboratorio donde se experimenta el tránsito de lo nacional a lo postnacional.

En suma, el propósito general del artículo es repensar la ciudadanía latinoamericana desde sus fronteras móviles, mostrando cómo las tensiones entre Marshall y los caminos latinoamericanos se despliegan en una geografía desigual de derechos. El análisis cubre un arco temporal que va desde la consolidación democrática de inicios de siglo hasta las mutaciones recientes provocadas por la pandemia y la digitalización

## **MARSHALL Y LA GENEALOGÍA LIBERAL DE LA CIUDADANÍA MODERNA**

T. H. Marshall planteó en 1950, en su ensayo clásico, *Citizenship and Social Class*, una secuencia histórica de expansión de derechos que constituyó el núcleo de la ciudadanía moderna: primero los derechos civiles, asociados a la libertad individual y al Estado de derecho (siglo XVIII); luego los derechos políticos, ligados a la participación y al sufragio (siglo XIX); y finalmente los derechos sociales, que garantizan bienestar y protección (siglo XX). Esta narrativa, derivada del caso inglés, articulaba la ciudadanía como un proceso de integración nacional, donde el Estado aseguraba igualdad formal y pertenencia colectiva. Marshall entendía la ciudadanía como un conjunto de derechos que otorgaban a todos los miembros de la sociedad un estatus común, mitigando las desigualdades de clase propias del capitalismo. Sin embargo, esa visión liberal-evolutiva resultaba profundamente eurocéntrica: presuponía Estados consolidados, homogeneidad cultural y una trayectoria lineal de inclusión. En América Latina, los procesos históricos siguieron trayectorias distintas: las ciudadanía social corporativas del siglo XX —ligadas a regímenes populistas y desarrollistas— precedieron muchas veces a la plena vigencia de derechos civiles y políticos. Por ello, se enfatiza que, “la región se caracteriza por una “ciudadanía de baja intensidad”: formalmente universal, pero materialmente limitada por la desigualdad, la informalidad laboral y la debilidad institucional. (O'Donnell, 1993).

## **LA CRISIS DEL MODELO NACIONAL DE CIUDADANÍA**

El modelo nacional de ciudadanía —heredero de Marshall— se sustentaba en la centralidad del Estado-nación, la idea de soberanía y la pertenencia a una comunidad política delimitada territorialmente. Este modelo articulaba tres principios: el vínculo jurídico-político entre individuo y Estado, la igualdad de derechos dentro del territorio nacional, y la identidad colectiva definida por la nación. Desde los años ochenta, la globalización neoliberal comenzó a erosionar esas bases. La apertura económica, la movilidad del capital y la flexibilización laboral redujeron la capacidad estatal para sostener la ciudadanía social. A su vez, la expansión de los derechos humanos y la movilidad migratoria generaron un nuevo marco de pertenencias múltiples. Autores como ( Soysal, 1994) y (Habermas, 1998) hablaron de una ciudadanía “postnacional”: una forma de pertenencia sustentada en derechos universales, más allá del Estado nacional. En este enfoque, la

legitimidad deriva de la membresía en la comunidad de los derechos humanos, no exclusivamente de la nacionalidad. Sin embargo, esta noción enfrentó críticas desde el Sur Global. En contextos latinoamericanos, donde los Estados aún son débiles y la protección efectiva de los derechos depende de su capacidad institucional, la idea de ciudadanía postnacional no puede sustituir la estatal. (Luque, 2002) lo planteó con claridad: los sujetos migrantes latinoamericanos no abandonan el marco nacional, sino que lo reconfiguran desde su práctica cotidiana, habitando “campos intermedios” entre lo nacional y lo postnacional.

### **LOS CAMINOS DE LA CIUDADANÍA: APORTES DE LUQUE BRAZÁN**

En *Los caminos de la ciudadanía: entre el modelo nacional y el postnacional* (FLACSO-México, 2002), José Carlos Luque Brazán analizó el caso de los inmigrantes peruanos en Santiago de Chile para demostrar que la ciudadanía no es una categoría estática, sino un proceso relacional y conflictivo. Su propuesta teórica puede sintetizarse en tres tesis:

- a) La ciudadanía es un camino, no un estado. Se construye en la práctica cotidiana mediante negociaciones, conflictos y estrategias de reconocimiento.
- b) El modelo nacional se fractura, pero no desaparece: los sujetos siguen recurriendo al Estado, aun cuando éste no garantice plenamente sus derechos.
- c) El modelo postnacional emerge desde abajo, a través de experiencias transnacionales de pertenencia, redes migrantes y mediaciones globales.

Esta lectura amplía la concepción de Marshall: los derechos no solo se expanden en el tiempo, sino que se reconfiguran en el espacio, cruzando fronteras nacionales. Los “caminos de la ciudadanía” son entonces itinerarios simultáneamente territoriales y simbólicos, donde los sujetos se desplazan entre múltiples regímenes normativos. Para Luque Brazán, el fenómeno migratorio latinoamericano revela la contradicción central del siglo XXI: el Estado sigue siendo indispensable para la protección de los derechos, pero ya no es suficiente para definir la pertenencia política.

### **DE MARSHALL AL MODELO HÍBRIDO NACIONAL-POSTNACIONAL**

El diálogo entre Marshall y Luque Brazán permite articular un modelo híbrido de ciudadanía contemporánea. Del lado nacional, subsisten las instituciones jurídicas, las políticas sociales y los mecanismos de representación. Del lado postnacional, emergen redes transnacionales de derechos, organizaciones internacionales, plataformas digitales y circuitos migrantes que generan nuevas formas de pertenencia. Este híbrido no implica una transición lineal de un modelo a otro, sino un entramado de coexistencia y tensión. En América Latina, la ciudadanía se ejerce en este doble registro: los derechos sociales y políticos dependen del Estado, mientras que los derechos culturales y digitales abren horizontes postnacionales. Los debates contemporáneos sobre ciudadanía han incorporado tres ejes teóricos complementarios: reconocimiento, redistribución y representación. Fraser (2003) propuso que la justicia debe pensarse como una combinación de redistribución económica y reconocimiento cultural. La ciudadanía, en este marco, se convierte en el campo donde ambos principios se articulan o entran en conflicto. Axel Honneth (1996) desarrolló la teoría del reconocimiento como base moral de la autonomía individual. La falta de reconocimiento genera formas de desprecio que impiden el ejercicio pleno de la ciudadanía. Taylor Ch. (1992), subrayó que las identidades colectivas requieren reconocimiento público para existir en igualdad de condiciones, planteando el desafío de la diferencia dentro de la unidad. En América Latina, estas teorías cobran fuerza particular porque la desigualdad económica se entrelaza con la exclusión cultural. Así, la ciudadanía ya no puede reducirse a la igualdad jurídica: debe incluir el reconocimiento de las diferencias y la redistribución de recursos. El surgimiento de los movimientos indígenas, afrodescendientes y feministas en las últimas décadas introdujo un nuevo horizonte de ciudadanía plurinacionales. Autores como Kymlicka (1995) defendieron la necesidad de reconocer derechos colectivos dentro de los Estados liberales; mientras que desde América Latina, Quijano (2000), Walsh (2010) y Rivera Cusicanqui (2015) denunciaron la persistencia de la colonialidad del poder y del saber. Para estos enfoques, la ciudadanía liberal-nacional es un producto de la modernidad colonial que invisibiliza los saberes y derechos de los pueblos subalternos. La

“ciudadanía decolonial” no busca únicamente inclusión en el Estado, sino transformación de su lógica: reconocer la pluralidad de naciones, territorios y formas de vida.

En Bolivia y Ecuador, las constituciones plurinacionales de 2008 y 2009 materializan parcialmente esa demanda, al reconocer derechos colectivos y de la naturaleza. Sin embargo, como señalan Sousa Santos (2010) y Luque J. (2021), la institucionalización de la plurinacionalidad no garantiza su ejercicio efectivo: las tensiones entre el Estado y los pueblos continúan marcando los límites del modelo nacional. En las dos últimas décadas, la revolución digital ha creado un nuevo espacio de ejercicio ciudadano: las redes, las plataformas y los datos. La noción de ciudadanía digital incluye el acceso a internet, la protección de datos, la participación en línea y la alfabetización mediática. En América Latina, organismos como la CEPAL (2023) y la UNESCO (2022) advierten que la brecha digital reproduce desigualdades sociales y territoriales. Además, la gobernanza de la red trasciende las fronteras estatales: las plataformas globales controlan la infraestructura del espacio público digital, generando un campo de derechos que ya no depende exclusivamente del Estado nacional. Este es uno de los ámbitos más claros del modelo postnacional: la disputa por los derechos digitales es, en esencia, una lucha global por la soberanía de los datos y la libertad de expresión.

Síntesis teórica: hacia una ciudadanía latinoamericana plural y estratificada: De la integración entre Marshall y Luque Brazán emerge una conceptualización plural de la ciudadanía latinoamericana contemporánea.

- Primero, la ciudadanía nacional, basada en la pertenencia jurídica al Estado, que garantiza derechos civiles, políticos y sociales.
- Segundo, la ciudadanía postnacional, sustentada en derechos universales, transnacionales y digitales.
- Tercero, la ciudadanía multicultural, que incorpora reconocimiento de diferencias étnicas, de género y territoriales.

La conjunción de estos niveles genera una ciudadanía estratificada y asimétrica: la pertenencia formal no asegura el acceso real a derechos, y la protección depende de la posición social, étnica y territorial. Por ello, el modelo marshalliano debe ser reinterpretado no como una secuencia lineal, sino como un campo de tensiones simultáneas donde coexisten distintas temporalidades. En América Latina, los derechos sociales se expanden a veces antes que los civiles; los culturales preceden a los políticos; y los digitales emergen como nuevo límite y oportunidad. Esta comprensión plural permite analizar la ciudadanía latinoamericana después de la globalización como un proceso de articulación conflictiva entre lo nacional y lo postnacional, entre el reconocimiento y la redistribución, entre la soberanía estatal y la red global.

## 1. Diseño de investigación y enfoque analítico

El diseño metodológico es de tipo comparativo y longitudinal. Se optó por un enfoque sincrónico-diacrónico que permite observar, por un lado, la evolución temporal de los derechos dentro de cada país (diacronía), y por otro, las diferencias y convergencias regionales (sincronía). Este doble enfoque busca superar la descripción aislada de casos nacionales para identificar patrones estructurales de ciudadanía en la región.

La elección del período 2000–2025 responde a tres criterios:

- a) marca el inicio del nuevo ciclo democrático latinoamericano posterior a las transiciones de los años ochenta y noventa;
- b) abarca las fases de expansión y retracción de los derechos sociales y políticos bajo los diferentes gobiernos progresistas y conservadores;
- c) culmina con el impacto de la pandemia de COVID-19 y la expansión de la ciudadanía digital como nuevo componente de la vida pública.

El enfoque es también interpretativo y crítico. No se pretende medir la ciudadanía en términos meramente institucionales, sino comprenderla como un proceso social, histórico y simbólico en el sentido que propuso José Carlos Luque Brazán en *Los caminos de la ciudadanía* (2002). En esa línea, la metodología asume que la ciudadanía latinoamericana se construye simultáneamente en el plano jurídico, material y cultural, y que su análisis requiere incorporar tanto las estructuras estatales como las prácticas sociales que las desafían o resignifican.

## 2. Selección de casos

Los ocho países seleccionados representan distintas trayectorias históricas e institucionales dentro de América Latina:

- México: transición democrática, paridad de género y persistencia de violencia estructural.
- Chile: consolidación institucional, estallido social de 2019 y proceso constituyente.
- Colombia: implementación del Acuerdo de Paz y tensiones por violencia residual.
- Argentina: tradición de derechos sociales y movimientos feministas.
- Perú: inestabilidad política y ciudadanía fragmentada.
- Ecuador: giro plurinacional y cambios constitucionales.
- Bolivia: consolidación de la plurinacionalidad bajo el liderazgo indígena.
- Venezuela: erosión del régimen democrático y crisis social de gran magnitud.

La comparación permite observar tres subregiones: el Cono Sur, los Andes y Mesoamérica. Brasil fue deliberadamente excluido de este análisis principal por su carácter estructuralmente distinto y será objeto de un estudio específico. La selección busca representar distintos modelos de Estado, sistemas políticos y niveles de capacidad institucional, lo que posibilita un análisis más amplio de las variaciones en los “caminos de la ciudadanía”.

## 3. Fuentes de información y verificación

Se emplearon fuentes secundarias verificables y rastreables de organismos internacionales y bases de datos académicas reconocidas, con el fin de garantizar la validez y la confiabilidad de los indicadores. Entre ellas se incluyen:

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): *Panorama Social de América Latina* (2000–2024).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): *Informes sobre Desarrollo Humano* y bases de datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
- Banco Mundial (WDI): indicadores de pobreza, desigualdad, educación, conectividad digital y gasto social.
- Freedom House: *Freedom in the World* (2000–2025), sobre derechos civiles y políticos.
- Varieties of Democracy Project (V-Dem, Universidad de Gotemburgo): índices de democracia liberal, participativa y deliberativa.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): informes anuales y reportes por país.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): indicadores de acceso digital y derechos culturales.
- Informes nacionales y constituciones reformadas durante el período de estudio.

A nivel cualitativo, se utilizaron artículos académicos publicados en revistas indexadas y tesis universitarias relacionadas con el tema, entre ellas la tesis de maestría de José Carlos Luque Brazán (FLACSO-México, 2002) como fuente teórica central.

#### 4. Estrategia comparativa

El método comparado se aplica mediante una matriz de dimensiones, construida para evaluar la evolución de cada tipo de derecho y su vinculación con el modelo nacional o postnacional. Las dimensiones son cinco: civil, política, social, cultural/plurinacional y digital. Cada dimensión incluye indicadores concretos, seleccionados por su relevancia y disponibilidad estadística.

- Derechos civiles: independencia judicial, acceso a la justicia, libertad de expresión, homicidios por 100 000 habitantes, agresiones a periodistas y activistas, y mecanismos de protección de derechos humanos.
- Derechos políticos: participación electoral, libertad de asociación, paridad de género, representación indígena, libertad de prensa y existencia de procesos constituyentes o de consulta.
- Derechos sociales: pobreza, desigualdad (índice de Gini), cobertura en salud y educación, gasto social como porcentaje del PIB y políticas de cuidado.
- Derechos culturales y plurinacionales: reconocimiento constitucional de pueblos originarios, políticas de educación intercultural, leyes de consulta previa y autonomía territorial.
- Derechos digitales: acceso a internet, leyes de protección de datos, ciberseguridad, brecha rural-urbana y programas de alfabetización digital.

Cada indicador se analizó según tres categorías: avance, estancamiento o retroceso, en los tres subperiodos definidos: 2000–2014, 2015–2019 y 2019–2025.

El modelo comparativo combina análisis descriptivo y procesual. En primer lugar, se identifican tendencias generales a partir de los indicadores estadísticos. En segundo, se realiza un análisis cualitativo de los hitos institucionales y sociales que explican los cambios: reformas constitucionales, políticas públicas, movimientos sociales, estallidos de protesta y dinámicas de digitalización.

#### 5. Criterios de análisis

El análisis busca establecer el grado de correspondencia entre los cinco ejes de derechos y los dos modelos teóricos principales (nacional y postnacional). Se parte de tres supuestos:

- El modelo nacional se caracteriza por la primacía del Estado en la garantía de derechos.
- El modelo postnacional se manifiesta cuando los derechos se ejercen o se reclaman más allá de las fronteras estatales, en marcos transnacionales o digitales.
- Los países latinoamericanos combinan ambos modelos en distintos grados, produciendo formas híbridas de ciudadanía.

El objetivo no es clasificar a los países de manera rígida, sino identificar las dinámicas que mueven el equilibrio entre nacionalidad y transnacionalidad, entre institucionalidad estatal y redes globales de derechos.

#### 7. Limitaciones y alcances

Entre las limitaciones del estudio se destacan tres. En primer lugar, la disponibilidad desigual de datos comparables entre países y años, lo que obliga a recurrir a promedios o estimaciones regionales en algunos indicadores. En segundo lugar, las categorías de derechos culturales y digitales no siempre están plenamente institucionalizadas, por lo que su medición depende de fuentes cualitativas. En tercer lugar, el análisis no abarca la totalidad de los actores sociales que intervienen en la producción de ciudadanía (por ejemplo, movimientos juveniles o religiosos), aunque reconoce su relevancia. Pese a estas limitaciones, el enfoque comparativo permite captar una visión integral del cambio en la estructura de la ciudadanía latinoamericana, observando cómo las condiciones sociales y tecnológicas han desplazado el centro de gravedad del modelo marshalliano hacia nuevas formas de pertenencia.

## 8. Validación y confiabilidad

Para garantizar la validez, los datos fueron contrastados entre diversas fuentes institucionales. Los resultados cuantitativos se verificaron con las estadísticas de CEPAL, Banco Mundial y V-Dem; mientras que los hallazgos cualitativos se contrastaron con informes de la CIDH, Freedom House y estudios académicos. Asimismo, la integración de la tesis de Luque Brazán permitió situar los resultados en un marco interpretativo sólido, aportando coherencia teórica entre los datos y las categorías analíticas. Esta metodología busca, en síntesis, combinar la comparación empírica con la lectura interpretativa de los procesos ciudadanos, bajo la hipótesis de que América Latina ha transitado entre 2000 y 2025 hacia una configuración híbrida de ciudadanía, donde lo nacional y lo postnacional coexisten en tensión constante.

## RESULTADOS COMPARADOS (2000–2025)

### 1. Panorama general

Entre 2000 y 2025, América Latina experimentó una notable expansión de los marcos legales de derechos, acompañada de una creciente fragilidad en su aplicación. Los datos recabados muestran que la región avanzó de manera desigual: mientras los derechos sociales y culturales se ampliaron de forma significativa en varios países, los derechos civiles y políticos registraron retrocesos por causas vinculadas a la violencia, la polarización y el debilitamiento institucional. Las series de datos de la CEPAL y del Banco Mundial confirman una reducción sustancial de la pobreza en el período 2000–2014, seguida de un estancamiento o retroceso en los años posteriores, especialmente tras la pandemia. Por su parte, los índices de Freedom House y V-Dem revelan un deterioro de la calidad democrática en varios países, especialmente entre 2016 y 2023. El patrón que se desprende del análisis comparado es el de una ciudadanía estratificada, en la cual la expansión formal de los derechos no se traduce necesariamente en su ejercicio efectivo. La brecha entre derecho reconocido y derecho ejercido se amplía por las desigualdades sociales, la violencia y la debilidad de los sistemas judiciales. En este contexto, los modelos nacionales de ciudadanía han coexistido con formas postnacionales emergentes, como el reconocimiento de derechos transfronterizos, la acción de organismos internacionales y la irrupción de los espacios digitales como ámbitos de participación política y cultural.

### 2. Derechos civiles

Los derechos civiles —que incluyen el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la protección frente a la violencia y la seguridad jurídica— son el eje más afectado por las crisis estructurales de la región. En México y Colombia, los niveles de violencia se mantuvieron persistentemente altos. Según el Banco Mundial (WDI, 2024), México registró tasas de homicidio superiores a 25 por cada 100 000 habitantes durante gran parte del período, con picos de 29 en 2018. Colombia, tras el Acuerdo de Paz de 2016, redujo las cifras de homicidios, pero la violencia contra líderes sociales se incrementó significativamente entre 2019 y 2023, según informes de la CIDH. Chile y Argentina presentaron indicadores más estables, con sistemas judiciales más confiables y menores niveles de violencia, aunque ambos países enfrentaron conflictos recientes por abuso policial y violaciones a los derechos humanos durante protestas sociales (Chile en 2019, Argentina en 2022). En Perú, la crisis política recurrente y los enfrentamientos sociales tras el colapso de gobiernos sucesivos (2020–2023) deterioraron las garantías civiles. En Ecuador y Bolivia, las tensiones institucionales y los episodios de violencia política afectaron la confianza ciudadana en la justicia. Venezuela, por su parte, mostró un colapso generalizado de los derechos civiles, con denuncias de detenciones arbitrarias, censura y represión de la disidencia, documentadas por Freedom House y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2023). A nivel regional, la libertad de prensa y la independencia judicial mostraron una tendencia descendente: V-Dem registra una caída promedio de 15 puntos en el índice de independencia judicial entre 2005 y 2022 en la mayoría de los países estudiados. Este deterioro refuerza la hipótesis de que la dimensión civil es la más vulnerable del modelo nacional latinoamericano.

### 3. Los derechos sociales en América Latina: entre la justicia redistributiva y la nueva cuestión social

La crisis contemporánea de los derechos sociales en América Latina no puede entenderse sin reconocer la transformación estructural del capitalismo global. Desde finales del siglo XX, la región experimentó un proceso de reconfiguración productiva y financiera que desarticuló los mecanismos de integración social sobre los cuales descansaban las promesas de bienestar. El trabajo formal, que había sido el eje del pacto fordista y del imaginario del progreso, dio paso a la precariedad y la informalidad como norma. En ese contexto, la ciudadanía social perdió su base material: sin empleo estable, el acceso a la seguridad social, la salud o la vivienda quedó condicionado por la capacidad individual de insertarse en mercados laborales desiguales y volátiles.

En este marco, los programas de transferencias condicionadas se convirtieron en el rostro visible del nuevo orden social latinoamericano. Aunque contribuyeron a reducir la pobreza extrema, reforzaron la figura del “ciudadano cliente”, dependiente del subsidio estatal y de la mediación política local. Así, los derechos sociales se despolitizaron: pasaron de ser conquistas colectivas a instrumentos de gestión tecnocrática. Este proceso consolidó un modelo de inclusión subordinada, en el cual la asistencia reemplazó a la justicia y la focalización desplazó a la universalidad.

La noción misma de bienestar se transformó. Mientras en los años cincuenta y sesenta el desarrollo se asociaba al pleno empleo y la expansión del gasto público, en la era neoliberal se redefinió como estabilidad macroeconómica, control de la inflación y disciplina fiscal. Las reformas estructurales impuestas por el FMI y el Banco Mundial dismantelaron sistemas de pensiones solidarios, privatizaron servicios públicos y promovieron la mercantilización de derechos básicos. La salud, la educación y la vivienda se convirtieron en mercancías sometidas a la lógica del lucro. En consecuencia, la desigualdad social, lejos de reducirse, se intensificó.

No obstante, los primeros años del siglo XXI trajeron una revalorización del Estado como garante de derechos. Los gobiernos progresistas impulsaron políticas redistributivas y reformas constitucionales que buscaron reinstalar el principio de justicia social. El “giro a la izquierda” (2003–2015) permitió avances significativos en reducción de pobreza, ampliación del salario mínimo y reconocimiento de derechos colectivos. Sin embargo, la dependencia de las economías extractivas —basadas en la exportación de hidrocarburos, minerales y soja— hizo que la expansión del gasto social estuviera atada al ciclo de precios internacionales. Cuando este colapsó, también lo hizo la sostenibilidad de los programas sociales.

A partir de 2015, la región entró en una fase de restauración conservadora. La austeridad fiscal, el endeudamiento y la pandemia de COVID-19 produjeron una **nueva cuestión social**: amplios sectores que habían salido de la pobreza retornaron a la vulnerabilidad. Millones de trabajadores informales quedaron sin ingresos ni protección. En países como México, Perú o Brasil, las brechas de género, edad y etnia determinaron la exposición diferencial a la crisis. La pandemia mostró que la desigualdad no es un residuo del pasado, sino una forma activa de gobierno.

En respuesta, emergen propuestas que buscan redefinir la ciudadanía social desde una perspectiva de derechos humanos, feminista y ecológica. Los movimientos por la salud pública, la educación gratuita, el derecho a la ciudad y el ingreso básico universal expresan un intento por recuperar el sentido emancipador del bienestar. En este marco, el debate contemporáneo gira en torno a dos preguntas: ¿cómo financiar derechos universales en economías dependientes? y ¿cómo democratizar el Estado sin subordinarlo a la lógica del mercado?

Autores como Nancy Fraser (2022) y Boaventura de Sousa Santos (2014) plantean que la justicia social debe ser simultáneamente redistributiva, representativa y ecológica. Es decir, no basta con redistribuir recursos: es necesario transformar las estructuras de poder que producen exclusión y depredación. En América Latina, esto implica desmontar la colonialidad del poder y del saber, democratizar la propiedad de los medios de producción, reformar los sistemas tributarios regresivos y garantizar la sostenibilidad ambiental.

El horizonte de los derechos sociales en el siglo XXI latinoamericano, por tanto, está vinculado a una transición civilizatoria. La ciudadanía del futuro no se medirá solo por el consumo, sino por la capacidad de producir vida digna en comunidad. Recuperar el sentido colectivo de lo social —la salud pública como bien común, la educación como práctica de libertad, el trabajo como derecho y no mercancía— constituye la tarea central de una democracia sustantiva.

#### 4. Los derechos civiles: el cuerpo como frontera de la ciudadanía

En América Latina, los derechos civiles han sido objeto de una expansión normativa y, a la vez, de una erosión práctica. Esta paradoja se refleja en la coexistencia de marcos jurídicos avanzados y realidades de violencia cotidiana. Los textos constitucionales proclaman la inviolabilidad de la vida y la dignidad humana, pero los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas persisten como formas estructurales de control social.

El cuerpo —particularmente el cuerpo de las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los migrantes— se ha convertido en la frontera última de la ciudadanía. Allí donde el Estado debería garantizar seguridad y libertad, actúa como agente de vulneración. La represión policial en barrios populares, la criminalización de la protesta y la violencia carcelaria son síntomas de una ciudadanía jerarquizada. En lugar de un sujeto de derechos, el ciudadano latinoamericano aparece como un sujeto vigilado, disciplinado o desechable.

El neoliberalismo transformó las políticas de seguridad en dispositivos de control poblacional. Bajo la retórica de la “guerra contra las drogas”, muchos Estados militarizaron la vida cotidiana y suspendieron garantías constitucionales. En México, Brasil o Colombia, los cuerpos militarizados ocuparon el lugar de las políticas sociales, produciendo una seguridad sin justicia. Este modelo de “estado de excepción permanente” normalizó la muerte como horizonte político, configurando lo que Mbembe (2019) denomina una **neropolítica**: el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir.

A pesar de ello, el siglo XXI ha visto emerger resistencias que resignifican los derechos civiles desde el dolor colectivo. Los movimientos de víctimas, familiares de desaparecidos y colectivos feministas han convertido el espacio público en un territorio de duelo y denuncia. Estas luchas, más allá de la demanda de justicia, producen conocimiento y memoria. La acción colectiva se transforma en pedagogía cívica: al exigir verdad y reparación, se reconstituye el tejido moral de la sociedad.

Asimismo, los movimientos de diversidad sexual y de género han ampliado el alcance de los derechos civiles hacia el reconocimiento identitario. Países como Argentina, Uruguay y México han aprobado leyes de identidad de género y matrimonio igualitario, marcando un giro cultural hacia la inclusión. Sin embargo, estos avances conviven con retrocesos impulsados por fundamentalismos religiosos y discursos de odio. La disputa por el cuerpo y por la libertad sexual sigue siendo una de las batallas más intensas del presente.

La era digital agrega nuevas capas de complejidad. La vigilancia masiva, la minería de datos y la manipulación informativa vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. En América Latina, donde los monopolios tecnológicos actúan con escasa regulación, la ciudadanía digital se encuentra en una zona gris: los ciudadanos son simultáneamente usuarios, productores de información y objetos de control. Esta situación exige una actualización del catálogo de derechos civiles que incluya la protección de datos, la neutralidad de la red y la alfabetización digital crítica.

El fortalecimiento de los derechos civiles en la región pasa, por tanto, por reconfigurar la relación entre Estado, sociedad y tecnología. Se requiere una justicia que combine reparación con transformación, un Estado que renuncie a la violencia estructural y una sociedad civil capaz de sostener la memoria como herramienta política. El cuerpo y la palabra, la calle y la red, son los escenarios contemporáneos de una lucha que redefine la idea misma de libertad.

## 5. Los derechos políticos: democracia, poder y soberanía popular

La historia latinoamericana demuestra que los derechos políticos no son una dádiva de las élites, sino el resultado de luchas sociales persistentes. Desde los movimientos independentistas hasta las transiciones postautoritarias, cada conquista democrática ha surgido de la presión popular. Sin embargo, la promesa de soberanía popular enfrenta hoy una crisis global de representación. Los ciudadanos votan, pero sienten que no deciden; participan, pero perciben que sus voces se diluyen en sistemas capturados por intereses económicos.

La democracia latinoamericana contemporánea vive bajo el signo de la paradoja: más elecciones que nunca, pero menos confianza en la política. El descontento se expresa en movilizaciones masivas, protestas contra la corrupción y demandas de asambleas constituyentes. Desde el estallido chileno de 2019 hasta las movilizaciones colombianas y mexicanas, el continente ha vuelto a las calles para exigir una democracia real. Estas irrupciones ciudadanas muestran que los derechos políticos ya no pueden reducirse al sufragio: se extienden a la deliberación, la transparencia, la participación digital y el control social del poder.

El siglo XXI trajo consigo una diversificación de actores políticos: feminismos, movimientos ambientalistas, pueblos indígenas, colectivos juveniles y migrantes transnacionales. Cada uno de ellos ha introducido agendas que reformulan la noción clásica de representación. Los feminismos, por ejemplo, han politizado la vida cotidiana, colocando el cuidado, el cuerpo y la reproducción en el centro del debate público. Los movimientos indígenas, por su parte, han reivindicado formas de autogobierno basadas en la reciprocidad y la asamblea. Estas experiencias subvierten la lógica liberal del individuo propietario y abren paso a una **democracia comunal**.

No obstante, la expansión de la participación convive con tendencias autoritarias. En varios países, el populismo de derecha y la tecnocracia neoliberal convergen en estrategias de concentración de poder. El discurso antipolítico, la judicialización de la política y el uso de redes sociales para desinformar socavan la esfera pública. La “democracia algorítmica”, como advierten analistas críticos, transforma al ciudadano en consumidor de información personalizada, erosionando la deliberación colectiva.

Frente a ello, los movimientos sociales experimentan con formas de autogestión y gobernanza horizontal. Experiencias como las asambleas barriales argentinas, los consejos comunales venezolanos o los cabildos abiertos chilenos muestran que la participación puede reconstruirse desde abajo. Estas prácticas, aunque fragmentarias, encarnan el principio de **democracia desde abajo** (Luque Brazán, 2023): la idea de que la soberanía popular no se delega, se ejerce.

El futuro de los derechos políticos en América Latina dependerá de la capacidad de articular las demandas sociales en proyectos institucionales duraderos. Ello exige reformar los sistemas electorales, garantizar la paridad de género, reconocer la representación plurinacional y democratizar los medios de comunicación. Pero, sobre todo, requiere reinventar la pedagogía democrática: reconstruir la confianza ciudadana mediante prácticas de corresponsabilidad y deliberación pública.

En esta tarea, la educación cívica y los medios comunitarios desempeñan un papel crucial. No hay ciudadanía política sin alfabetización democrática, sin capacidad crítica para comprender y transformar el poder. Por ello, la democracia latinoamericana del siglo XXI deberá ser, a la vez, representativa, participativa y deliberativa, pero también afectiva y solidaria. Se trata de reconciliar la política con la vida, de convertir la desafección en energía transformadora.

Como señala Boaventura de Sousa Santos (2014), “no habrá democracia global sin democratizar la democracia”. América Latina, con su historia de insurrecciones, constituye el laboratorio donde esa democratización puede ensayarse. Los derechos políticos, lejos de ser instituciones estables, son procesos vivos: se conquistan, se defienden y se reinventan cada día.

## 6. Derechos digitales

La irrupción de las tecnologías digitales transformó la noción misma de ciudadanía. A comienzos del siglo XXI, menos del 15% de los hogares latinoamericanos tenía acceso a internet; en 2024 la cifra supera el 75% (Banco Mundial, 2024). Este crecimiento ha permitido ampliar la participación política, la educación en línea y la organización social, pero también ha generado nuevas brechas y riesgos. México, Chile, Argentina y Colombia aprobaron leyes de protección de datos personales y de neutralidad de la red entre 2010 y 2018. Ecuador y Perú implementaron políticas de inclusión digital y alfabetización tecnológica. Bolivia y Venezuela presentan mayores rezagos en conectividad y libertad digital. La brecha digital sigue siendo significativa entre áreas urbanas y rurales, y entre clases sociales. La CEPAL (2023) estima que un 32% de la población rural de la región aún carece de conexión estable. Además, los problemas de vigilancia digital, censura y desinformación se han convertido en desafíos para la libertad de expresión y la privacidad. El espacio digital, al no estar completamente regulado por los Estados, constituye el escenario más claro del modelo postnacional. En él, la ciudadanía se ejerce mediante plataformas transnacionales, movimientos en línea y debates globales sobre derechos digitales.

## 7. Síntesis regional

El análisis comparado permite distinguir tres patrones regionales:

1. Convergencia formal y divergencia real: todos los países han adoptado marcos legales de derechos, pero su implementación es desigual.
2. Expansión social y cultural, fragilidad civil: los derechos sociales y culturales han crecido, mientras los civiles (seguridad, justicia, expresión) permanecen en crisis.
3. Emergencia de un quinto eje digital: el acceso a internet y la protección de datos configuran una nueva capa de ciudadanía transnacional.

En conjunto, la ciudadanía latinoamericana entre 2000 y 2025 muestra un proceso de expansión normativa y contracción material. Los Estados nacionales continúan siendo actores centrales, pero su capacidad para garantizar derechos está crecientemente mediada por actores globales, corporaciones digitales y redes internacionales. El modelo resultante no sustituye lo nacional por lo postnacional, sino que articula ambas dimensiones en un régimen híbrido de ciudadanía, en el que la pertenencia, la participación y los derechos se negocian constantemente entre el territorio y la red, entre el Estado y la globalización.

## CONCLUSIONES

El recorrido por los derechos sociales, civiles y políticos en América Latina entre los años 2000 y 2025 permite reconocer que la ciudadanía latinoamericana no ha desaparecido con la globalización, sino que se ha transformado profundamente. Lo que se observa en estas dos décadas no es el fin del paradigma marshalliano, sino su reconfiguración en condiciones históricas que el propio Marshall no pudo prever: un capitalismo global digitalizado, una ecología social en crisis y una ciudadanía cada vez más transnacional. Si el modelo clásico se fundaba en el Estado-nación como garante de derechos, hoy las fronteras de la ciudadanía se desdibujan entre el mercado, la comunidad y las redes globales. América Latina constituye, en este sentido, un laboratorio de mutaciones democráticas, donde los derechos se ejercen muchas veces a pesar del Estado y no necesariamente a través de él.

El análisis de los derechos sociales muestra la paradoja más visible de este proceso: la región ha constitucionalizado la igualdad mientras reproduce desigualdades estructurales. Las promesas del Estado social latinoamericano fueron debilitadas por décadas de neoliberalismo y privatización, pero también reactivadas por movimientos sociales y gobiernos progresistas que intentaron recuperar el papel del Estado como garante de bienestar. Sin embargo, las conquistas de este ciclo fueron parciales y reversibles. El bienestar se sostuvo en economías extractivas y fiscalidades regresivas; dependió de la renta de los commodities más que de una transformación estructural. La pandemia de COVID-19 desnudó la fragilidad de

estos modelos y devolvió la cuestión social al centro del debate. Las políticas de emergencia demostraron que la vida digna no puede depender del mercado, pero también que la solidaridad estatal requiere estructuras redistributivas estables. La ciudadanía social latinoamericana, en consecuencia, vive en un estado de doble tensión: se amplía simbólicamente mientras se reduce materialmente. Se reconocen derechos en el texto constitucional que no se garantizan en la realidad cotidiana. La educación, la salud y la vivienda siguen marcadas por la desigualdad territorial y de clase; la pobreza y la informalidad erosionan el principio mismo de universalidad. Frente a ello, emergen experiencias que intentan reinventar la justicia social desde abajo: economías solidarias, cooperativas de mujeres, redes de cuidado comunitario, proyectos de agricultura sustentable y movimientos por el derecho al agua. Estas prácticas prefiguran una ciudadanía social insurgente, no dependiente del Estado ni subordinada al mercado, sino anclada en la comunidad. Tal como señala Luque Brazán, se trata de un “retorno del sujeto popular” que reapropia el lenguaje de los derechos para convertirlo en herramienta de acción colectiva.

En el plano de los derechos civiles, la región enfrenta una paradoja todavía más dolorosa: nunca hubo tantas leyes, tratados y discursos sobre derechos humanos, y sin embargo nunca hubo tanta violencia. La expansión normativa coexiste con una persistente impunidad estructural. Los cuerpos de mujeres, migrantes, campesinos y jóvenes pobres siguen siendo territorios de castigo y control. La guerra contra las drogas, la criminalización de la protesta y la militarización de la seguridad pública han generado una democracia vigilada, donde la violencia se ejerce en nombre de la paz. América Latina produce ciudadanía civil en el papel y necropolítica en la práctica. El cuerpo se convierte, así, en frontera y escenario de disputa. Frente a la violencia estructural, los movimientos sociales reinventan los derechos civiles como espacios de memoria, justicia y autonomía. Las madres de los desaparecidos, las colectivas feministas, los pueblos originarios y los defensores ambientales no sólo denuncian la violación de derechos, sino que crean nuevas formas de vida política. Su lucha recuerda que la libertad no es ausencia de coacción, sino capacidad de vivir sin miedo. Como enseñó Hannah Arendt, el derecho a tener derechos es el fundamento último de toda política humana. En América Latina, ese derecho a tener derechos se conquista cada día, no en las instituciones, sino en las calles, en las plazas, en las comunidades.

A ello se suma el desafío de las nuevas violencias digitales. La manipulación informativa, la vigilancia algorítmica y la exposición permanente en redes configuran una nueva frontera de los derechos civiles. Los ciudadanos del siglo XXI están simultáneamente hiperconectados y vigilados; participan en la esfera pública digital, pero bajo condiciones de asimetría tecnológica. América Latina enfrenta el reto de construir una ciudadanía digital que combine acceso, protección y alfabetización crítica. Sin este nuevo repertorio de derechos civiles, la libertad del siglo XXI corre el riesgo de convertirse en ilusión estadística. Los derechos políticos, por su parte, atraviesan una crisis de legitimidad sin precedentes. Las democracias latinoamericanas lograron consolidar elecciones libres y periódicas, pero no lograron construir confianza ni reducir la desigualdad. El voto se convirtió en un gesto cada vez más vacío cuando las decisiones estratégicas se tomaban en mercados financieros o tribunales constitucionales. De allí que la región viva un ciclo de desafección política y desbordamiento institucional: los ciudadanos se movilizan fuera de los partidos y las instituciones. Las protestas de Chile, Colombia, Perú o México muestran que la democracia ya no se expresa sólo en las urnas, sino también en la calle y en las redes.

La ciudadanía política latinoamericana se ha desplazado del plano formal al informal, de la representación al acontecimiento. Frente a la crisis de los partidos, emergen nuevas formas de organización: movimientos territoriales, colectivos feministas, asambleas comunales y plataformas transnacionales de migrantes. Estas experiencias recuperan la idea de soberanía popular desde abajo, reinventando el principio democrático en clave plural. No se trata ya de tomar el poder, sino de construirlo colectivamente. En este sentido, América Latina se adelanta a debates globales sobre democracia participativa, plurinacionalidad y justicia ambiental. Sin embargo, la expansión de la participación popular convive con el avance de nuevas derechas autoritarias. El siglo XXI trajo consigo populismos reaccionarios que instrumentalizan la frustración social y explotan el miedo. Estos proyectos conservadores se presentan como defensores del orden y la familia, pero en realidad buscan restringir derechos y disciplinar cuerpos. La democracia liberal, debilitada

por el neoliberalismo, se enfrenta a su espejo oscuro: el autoritarismo plebiscitario. Frente a ello, los movimientos ciudadanos deben sostener la apuesta por una democracia radical, no populista ni tecnocrática, capaz de vincular igualdad, pluralismo y cuidado.

El balance general de estas transformaciones sugiere que la ciudadanía latinoamericana posterior a la globalización se caracteriza por tres rasgos fundamentales: su fragmentación, su expansión simbólica y su potencial de reinención. Fragmentada, porque los derechos se ejercen de manera desigual entre territorios, clases y géneros; expandida, porque las luchas sociales han multiplicado los sujetos y los escenarios de la política; y reinventable, porque en medio de las crisis surgen nuevas prácticas de vida democrática. El modelo de Marshall, con su secuencia lineal de derechos, se ha invertido en el Sur Global. En América Latina, primero se conquistaron derechos sociales a través de luchas laborales y populismos redistributivos; luego se incorporaron derechos políticos en transiciones pactadas; finalmente se aspira a derechos civiles plenos en medio de regímenes violentos. La historia regional demuestra que no hay linealidad ni progreso garantizado: cada avance puede ser revertido, cada derecho conquistado puede ser expropiado por la lógica del mercado o del miedo. Pero también muestra que la ciudadanía es un proceso vivo, una práctica histórica que se reinventa en cada generación.

Repensar la ciudadanía después de la globalización exige abandonar la ilusión de la universalidad abstracta. No existe "el ciudadano" como figura homogénea, sino múltiples sujetos que habitan distintas condiciones de posibilidad. La ciudadanía latinoamericana es una constelación de experiencias: la migrante que exige derechos transnacionales; la mujer que interpela al patriarcado estatal; la comunidad indígena que defiende la autonomía y el territorio; el joven precarizado que reinventa la solidaridad digital. Cada uno de ellos amplía el horizonte de lo político y redefine el sentido del nosotros. Desde esta perspectiva, la tarea de las ciencias sociales latinoamericanas no es solo describir la erosión de la ciudadanía, sino contribuir a su reconstrucción. Esto implica producir conocimiento situado, crítico y comprometido con los procesos de transformación social. Como propone Boaventura de Sousa Santos, debemos pasar de una ciencia de la regulación a una ciencia de la emancipación. La ciudadanía, entendida así, deja de ser un objeto de estudio para convertirse en un horizonte ético y político.

El futuro de la ciudadanía latinoamericana dependerá de su capacidad para articular justicia social, reconocimiento y sostenibilidad. La crisis ecológica y civilizatoria obliga a incorporar el derecho a la naturaleza y a la vida digna como dimensiones centrales de la democracia. Los pueblos que defienden sus ríos, montañas y selvas no sólo reclaman recursos, reclaman otra forma de convivencia. En ellos se expresa una ciudadanía ecológica que amplía los límites de lo humano y redefine la noción misma de comunidad política. En este nuevo contexto, la política del cuidado emerge como principio articulador. Frente al individualismo neoliberal y la violencia estructural, los movimientos feministas y comunitarios proponen una ética del cuidado mutuo y la interdependencia. Cuidar el cuerpo, el territorio y la memoria se convierte en acto político. Esta ética del cuidado, como señala Rivera Cusicanqui, es también una epistemología: un modo de conocer desde la reciprocidad y no desde la dominación. La ciudadanía del siglo XXI, si quiere ser democrática, deberá aprender a cuidar.

En última instancia, el desafío de la región consiste en reconciliar igualdad política y justicia social, lo que implica reconstruir los lazos entre Estado y sociedad, individuo y comunidad, derechos y responsabilidades. América Latina no necesita importar modelos democráticos: posee en su propia historia las claves de una democracia por venir. En las comunas andinas, los cabildos indígenas, las redes de migrantes, las cooperativas urbanas y las asambleas feministas se ensayan formas de soberanía popular que desafían los moldes del liberalismo. Allí se incuban las nuevas ciudadanía del Sur. Si algo enseña este periodo es que la democracia latinoamericana, lejos de ser un fracaso, es una búsqueda inacabada. Cada estallido social, cada reforma, cada resistencia confirma que la región sigue pensando la igualdad como promesa y la justicia como horizonte. Frente a la globalización neoliberal, la ciudadanía latinoamericana no se rinde: se reconfigura, se desplaza, se expande. Su fuerza reside en su pluralidad y su memoria.

Así, la herencia de Marshall no se cancela, se transforma. La ciudadanía ya no puede ser pensada como una secuencia de derechos garantizados por un Estado soberano, sino como un entramado de luchas, territorios y afectos que constituyen una democracia viva. Lo que está en juego no es sólo la ampliación de derechos, sino la reinención de la propia idea de humanidad. En esa tarea, América Latina —con sus heridas, sus resistencias y su imaginación política— tiene mucho que enseñar al mundo.

## 1. Hacia una síntesis del recorrido

El análisis realizado entre los años 2000 y 2025 permite concluir que la ciudadanía latinoamericana se ha transformado en un entramado plural de derechos, identidades y prácticas que no puede comprenderse a partir de un único modelo. El marco teórico clásico de T. H. Marshall sigue siendo útil como punto de partida, pero resulta insuficiente para describir las realidades híbridas y desiguales de América Latina después de la globalización. La ciudadanía regional ya no responde a la secuencia civil-política-social, sino a una superposición de dimensiones nacionales, culturales y digitales que coexisten de manera conflictiva. El diálogo entre Marshall y José Carlos Luque Brazán permite actualizar la teoría de la ciudadanía desde el Sur. Mientras el primero veía una evolución lineal ligada al Estado de bienestar europeo, el segundo planteó que la ciudadanía es un camino: un proceso discontinuo, atravesado por las experiencias transnacionales, la desigualdad estructural y las múltiples pertenencias identitarias. Este enfoque, desarrollado originalmente en el estudio de los migrantes peruanos en Chile, ofrece una clave para interpretar toda la región. América Latina, en su conjunto, es hoy un espacio de ciudadanía transfronteriza, donde millones de personas ejercen derechos, envían remesas, participan políticamente o se comunican más allá de los límites de su Estado nacional. Durante el cuarto de siglo analizado, tres procesos interdependientes moldearon la estructura de la ciudadanía latinoamericana: la globalización neoliberal, la expansión de los derechos culturales y de género, y la revolución digital. Estos procesos reconfiguraron la relación entre Estado y sociedad civil, entre lo nacional y lo postnacional, entre la comunidad territorial y la red global. El resultado es una ciudadanía de tres capas superpuestas: la ciudadanía estatal, que mantiene el marco jurídico de derechos; la ciudadanía social, que depende de las políticas de bienestar y del gasto público; y la ciudadanía postnacional, que se despliega en las redes migratorias, los organismos internacionales y los espacios digitales. Estas capas no se reemplazan entre sí, sino que interactúan en un proceso de constante recomposición.

## 2. Relectura de los hallazgos por eje de derechos

El eje de los derechos civiles muestra el punto más débil del modelo latinoamericano. A pesar de los avances normativos en materia de acceso a la información y transparencia, la violencia estructural y la impunidad persisten como elementos centrales de la vida social. México y Colombia ilustran el dilema contemporáneo: Estados democráticos que reconocen derechos, pero son incapaces de garantizar seguridad básica. La ciudadanía civil, en estos contextos, depende más de redes comunitarias y del apoyo de organismos internacionales que de las instituciones nacionales. La presencia de una justicia fragmentada confirma la vigencia de lo que O'Donnell denominó “zonas marrones” del Estado de derecho. Los derechos políticos presentan un cuadro más ambivalente. La región ha logrado avances significativos en la inclusión de género y diversidad étnica, pero la calidad de la democracia enfrenta serios desafíos. Los procesos constituyentes de Bolivia, Ecuador y Chile representan momentos de apertura democrática, mientras que el cierre autoritario de Venezuela o la inestabilidad crónica del Perú evidencian los límites del modelo representativo. La democracia latinoamericana combina participación formal y déficit de legitimidad: los ciudadanos votan, pero desconfían de las instituciones. En este sentido, la ciudadanía política se ha desplazado hacia formas de participación no convencionales, como la movilización social, la protesta o el activismo digital.

En el ámbito de los derechos sociales, la región ha mostrado su mayor capacidad de innovación. La expansión de los programas de transferencias condicionadas, las políticas de salud universal y las pensiones no contributivas constituyen avances históricos. No obstante, la sostenibilidad fiscal y la desigualdad persistente impiden que estas políticas se consoliden como derechos universales. La pandemia de COVID-

19 demostró la vulnerabilidad de los sistemas sociales y la necesidad de ampliar los mecanismos de protección frente a crisis globales. América Latina mantiene una ciudadanía social incompleta: dependiente de la coyuntura económica y de la orientación política de los gobiernos. Los derechos culturales y plurinacionales han abierto un nuevo horizonte. Las constituciones de Bolivia y Ecuador marcaron un punto de inflexión al reconocer la existencia de múltiples naciones dentro del Estado. Sin embargo, la implementación práctica de estos derechos ha enfrentado la resistencia de las estructuras centralizadas y las lógicas extractivas. El reconocimiento formal de la diversidad convive con la marginalización material de los pueblos indígenas. En otros países, como México o Colombia, los avances son parciales, mientras que en Chile el intento de consagrar un Estado plurinacional fue bloqueado en el plebiscito de 2022. Esta situación evidencia que la ciudadanía multicultural es uno de los terrenos más disputados de la región: el lugar donde la promesa democrática se enfrenta con la herencia colonial. Finalmente, los derechos digitales constituyen el eje más novedoso y, al mismo tiempo, el más desregulado. La expansión del acceso a internet y la creación de marcos legales para la protección de datos representan pasos importantes, pero las brechas de conectividad, la vigilancia estatal y la concentración del poder informativo en manos de corporaciones globales generan nuevos desafíos. El espacio digital reproduce las desigualdades de clase, género y territorio que caracterizan a la región. En este sentido, la ciudadanía digital latinoamericana se desarrolla entre la emancipación y la dominación: ofrece herramientas para la participación, pero también para la manipulación y el control.

### 3. Implicaciones teóricas

El examen comparado permite formular varias implicaciones teóricas sobre el futuro del concepto de ciudadanía.

Primero, la ciudadanía ya no puede definirse únicamente en términos de pertenencia jurídica a un Estado. Los sujetos contemporáneos habitan múltiples esferas de afiliación: nacional, regional, transnacional y digital. Este pluralismo de pertenencias cuestiona el principio de exclusividad estatal que sustentaba el modelo de Marshall.

Segundo, la secuencia evolutiva marshalliana debe reinterpretarse como una estructura simultánea. En América Latina, los derechos sociales surgieron antes o al margen de los derechos civiles; los culturales antecedieron a los políticos; y los digitales se superponen a todos. No hay una progresión lineal sino una constelación de derechos en permanente conflicto.

Tercero, el concepto de ciudadanía en el Sur global incorpora dimensiones que Marshall no contempló: la interculturalidad, la memoria histórica, el medio ambiente y la tecnología. Estas dimensiones amplían la noción de pertenencia más allá de la comunidad política moderna, vinculándola con la justicia ecológica, la diversidad cultural y la inclusión digital.

Cuarto, la ciudadanía postnacional no reemplaza la nacional, sino que la complejiza. Los Estados continúan siendo los principales garantes de derechos, pero su capacidad depende cada vez más de redes globales, acuerdos internacionales y plataformas tecnológicas. La soberanía jurídica se vuelve relativa: los derechos pueden reclamarse ante instancias supranacionales o ejercerse en espacios virtuales no regulados por la ley nacional.

Quinto, el pensamiento latinoamericano aporta una lectura crítica que combina la teoría de los derechos con la teoría del poder. Autores como Quijano, Dussel y Rivera Cusicanqui recuerdan que la ciudadanía liberal se fundó sobre exclusiones coloniales y patriarcales. En la región, hablar de ciudadanía implica también hablar de descolonización, de redistribución y de reconocimiento. La ampliación de los derechos debe entenderse como un proceso de desmontaje de jerarquías históricas.

#### 4. Implicaciones políticas

Desde el punto de vista político, los hallazgos invitan a repensar el papel del Estado, la sociedad civil y las instituciones internacionales.

El Estado nacional sigue siendo el principal marco de protección de derechos, pero debe transformarse para responder a las exigencias de un mundo global e interconectado. Los Estados latinoamericanos necesitan fortalecer sus sistemas judiciales, garantizar la independencia de los poderes públicos y consolidar políticas sociales universales. Sin embargo, deben hacerlo reconociendo su inserción en redes globales y su obligación de cooperar con organismos internacionales de derechos humanos.

La sociedad civil, por su parte, ha adquirido una centralidad inédita. Movimientos feministas, indígenas, ambientales y digitales han sido los motores de la ampliación de derechos en las últimas décadas. La ciudadanía postnacional se construye en buena medida desde abajo, a través de estos movimientos que operan simultáneamente en el ámbito local y global. Los Estados deberían ver en ellos aliados estratégicos para profundizar la democracia.

A nivel internacional, las instituciones regionales como la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CEPAL desempeñan un papel creciente en la garantía de derechos y la producción de información. Fortalecer su autonomía y su capacidad de acción es esencial para consolidar una arquitectura de derechos postnacional en el continente.

#### 5. Desafíos estructurales

El proceso de construcción de una ciudadanía plena en América Latina enfrenta tres desafíos estructurales que deben abordarse de manera prioritaria. El primero es la violencia sistémica. Sin seguridad física ni justicia efectiva, los demás derechos se vuelven meramente declarativos. La impunidad y la criminalidad organizada minan la base civil de la ciudadanía. Combatir este problema exige reformar las policías, garantizar la independencia judicial y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. El segundo desafío es la desigualdad socioeconómica, que limita el acceso material a los derechos. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. La ciudadanía social requiere una reforma tributaria progresiva, inversión sostenida en educación, salud y cuidado, y una transición hacia economías verdes y digitales que generen empleo de calidad. El tercer desafío es la fragmentación institucional y la desconfianza democrática. La proliferación de crisis políticas y la polarización ideológica han erosionado la legitimidad de las instituciones. Recuperar la confianza requiere transparencia, participación ciudadana efectiva y mecanismos de control social sobre los poderes públicos. A estos tres ejes se suma un desafío transversal: la brecha digital. La expansión del acceso a internet no garantiza por sí misma inclusión, sino que puede reproducir desigualdades existentes. Se requiere un enfoque de derechos digitales que asegure acceso universal, alfabetización tecnológica y protección de datos personales.

#### 6. Recomendaciones para políticas públicas

El fortalecimiento de la ciudadanía en América Latina exige políticas integrales y coordinadas que aborden los distintos niveles de derechos. Se presentan algunas orientaciones generales derivadas del análisis comparado.

##### A. Reforzar el Estado de derecho:

- Reformar los sistemas judiciales para garantizar independencia, transparencia y acceso universal.
- Crear mecanismos regionales de cooperación judicial y protección de defensores de derechos humanos.

**B. Ampliar la ciudadanía social:**

- Consolidar sistemas de protección social universales, desvinculados de la coyuntura económica o partidaria.
- Invertir en políticas de cuidado, educación pública y salud universal como pilares de igualdad sustantiva.

**C. Promover la ciudadanía cultural y plurinacional:**

- Reconocer constitucionalmente la diversidad étnica y cultural.
- Garantizar la consulta previa y la autonomía territorial de los pueblos originarios.
- Fomentar la educación intercultural bilingüe y la preservación del patrimonio inmaterial.

**D. Consolidar la ciudadanía digital:**

- Asegurar el acceso equitativo a internet como derecho básico.
- Regular la protección de datos y la transparencia algorítmica.
- Impulsar políticas de alfabetización digital y ética tecnológica.

**E. Fomentar la participación democrática:**

- Promover mecanismos de democracia directa y deliberativa.
- Fortalecer la representación paritaria y la participación juvenil.
- Crear plataformas digitales seguras para la deliberación pública.

**F. Integrar la dimensión postnacional:**

- Potenciar la cooperación regional en materia de migración, derechos humanos y medio ambiente.
- Reforzar los mecanismos de integración latinoamericana como espacios de ciudadanía regional.
- Establecer acuerdos multilaterales sobre derechos digitales y soberanía de datos.

## **7. Proyecciones futuras**

La ciudadanía latinoamericana del siglo XXI se define por su carácter dinámico y su capacidad de adaptación. Las próximas décadas estarán marcadas por transformaciones tecnológicas, migraciones climáticas y reconfiguraciones geopolíticas que pondrán a prueba los marcos actuales de pertenencia y derechos. En este escenario, la región enfrenta la oportunidad de construir una teoría y una práctica propias de ciudadanía, basadas en su experiencia histórica de desigualdad, resistencia y creatividad social. El concepto de "camino" propuesto por Luque Brazán se vuelve aquí más relevante que nunca: los ciudadanos latinoamericanos avanzan por rutas diversas, a veces contradictorias, pero orientadas por una búsqueda común de dignidad y justicia. Los Estados deben acompañar esos recorridos, reconociendo su pluralidad y aprendiendo de las prácticas sociales que emergen desde abajo. La pandemia dejó una lección clara: la interdependencia global hace imposible pensar la ciudadanía como un asunto exclusivamente nacional. La salud, la información, el clima y la economía son bienes interconectados que exigen respuestas colectivas. América Latina puede aportar al debate mundial sobre ciudadanía global desde su experiencia de desigualdad estructural y creatividad social.

## **8. Conclusión general**

A lo largo de este trabajo se ha mostrado que la ciudadanía latinoamericana después de la globalización no puede entenderse como una simple prolongación del modelo europeo de Marshall ni como una ruptura total con el Estado nacional. Es, más bien, una articulación compleja entre ambos: un modelo híbrido donde la soberanía, la participación y los derechos se negocian en múltiples escalas. El tránsito del modelo nacional al postnacional no es lineal ni uniforme. En algunos países predomina la institucionalidad estatal; en otros, la

dinámica transnacional y digital. Pero en todos ellos persiste la aspiración a una ciudadanía integral que combine justicia social, reconocimiento cultural y libertad política. La ciudadanía latinoamericana del siglo XXI es una ciudadanía en movimiento: fragmentada, conflictiva y plural. Su desafío no es elegir entre el Estado y la globalización, sino construir puentes entre ambos. Los caminos que recorren sus pueblos —entre el reconocimiento y la redistribución, entre el territorio y la red— son también los caminos de una nueva teoría política, capaz de pensar la igualdad en un mundo desigual.

## BIBLIOGRAFÍA

- BANCO MUNDIAL. (2024). *World Development Indicators (WDI)*. Washington, D.C.: The World Bank. Disponible en <https://data.worldbank.org>
- CEPAL. (2020). *Panorama Social de América Latina 2019*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- CEPAL. (2023). *Panorama Social de América Latina 2023*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). (2022). *Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en las Américas*. Washington, D.C.: OEA.
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). (2023). *Derechos humanos y democracia en América Latina: balance regional 2019–2023*. Washington, D.C.: OEA.
- DUSSEL, E. (2008). *20 tesis de política*. México: Siglo XXI Editores.
- FRASER, N. (2003). *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. Nueva York: Verso.
- FREEDOM HOUSE. (2024). *Freedom in the World 2024: Democracy Under Threat*. Washington, D.C.: Freedom House. Disponible en <https://freedomhouse.org>
- HABERMAS, J. (1998). *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*. Cambridge, MA: MIT Press.
- HONNETH, A. (1996). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Cambridge: Polity Press.
- JELIN, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- KYMLICKA, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- LUQUE BRAZÁN, J. C. (2002). *Los caminos de la ciudadanía: entre el modelo nacional y el postnacional*. México: FLACSO-México.
- MARSHALL, T. H. (1950). *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'DONNELL, G. (1993). *Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales*. *Desarrollo Económico*, 33(130), 165–184.
- O'DONNELL, G. (1999). *Horizontal Accountability in New Democracies*. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126.
- QUIJANO, A. (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. En E. Lander (Ed.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201–246). Buenos Aires: CLACSO.

RIVERA CUSICANQUI, S. (2015). *Un mundo ch'ixi es posible: Ensayos desde un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón.

SANTOS B. DE SOUSA. (2010). *Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del Sur*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

SOYSAL, Y. N. (1994). *Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe*. Chicago: University of Chicago Press.

TAYLOR, C. (1992). *The Politics of Recognition*. En A. Gutmann (Ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (pp. 25–73). Princeton: Princeton University Press.

UNESCO. (2022). *Informe mundial sobre el desarrollo de la comunicación y la información*. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

V-DEM INSTITUTE. (2023). *Varieties of Democracy (V-Dem) Dataset v13*. Universidad de Gotemburgo. Disponible en <https://v-dem.net>

WALSH, C. (2010). *Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de) coloniales de nuestra época*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

## BIODATA

**Abril Lucila GÓMEZ FAJARDO:** Es doctora en estudios políticos y sociales; investigadora en ciencias sociales con enfoque en ciudadanía, derechos, teorías de la democracia y dinámicas políticas en América Latina. Está adscrita a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), donde participa en investigación y docencia en el nivel de posgrado y pregrado. Su labor académica se ha centrado en revisar críticamente los paradigmas clásicos de ciudadanía (como el de T. H. Marshall) en clave latinoamericana, abordando procesos de globalización, migración, intercambio cultural y transformación digital en la región. En su producción destacan artículos IA-U1, capítulos de libro, e intervenciones en congresos internacionales sobre derechos civiles, participación política y ciudadanía digital. La Dra. Gómez Fajardo ha coordinado proyectos de investigación financiados por la UAGro y co-dirigido redes académicas sobre ciudadanía y movilidad. Su enseñanza abarca cursos de teoría política contemporánea, ciudadanía, Estado y política latinoamericana, y metodología cualitativa. Entre sus líneas de trabajo figuran: ciudadanía híbrida, democratización latinoamericana, derechos digitales y educación política. Su perfil combina rigor teórico, compromiso regional y enfoque crítico desde el Sur Global. Su contribución posiciona a la UAGro como un nodo relevante en los debates contemporáneos de la democracia latinoamericana.